

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que en este juicio sumario de término de contrato de sub-arrendamiento de inmueble seguido ante el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago bajo el rol C-8160-2022, caratulado “Inversiones Black Cars Usados SPA con Expoautos SPA”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casación en el fondo deducido por la demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha trece de junio de dos mil veintitrés, que confirmó la de primer grado de veinte de diciembre de dos mil veintidós, que rechazó la demanda.

Segundo: Que el recurrente funda su arbitrio de nulidad -en primer término- en que el tribunal vulnera normas reguladoras de la prueba, específicamente los artículos 342 N° 2 del Código de Procedimiento Civil en relación con los artículos 1702 y siguientes del Código Civil. En un segundo nivel, postula que no debió ser condenado en costas porque litigó con motivo plausible, lo cual vulneraría el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

Solicita que se invalide la sentencia y se dicte la de reemplazo que acoja la demanda, con costas.

Tercero: Que, respecto al primer capítulo de nulidad sustancial, el artículo 772 N°1 del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso a un requisito indispensable para su admisibilidad, como es que el escrito en que se interpone “exprese”, es decir, explicita en qué consiste y cómo se ha producido el o los errores, siempre que estos sean “de derecho”.

Cuarto: Que atendido que en este juicio se rechazó la acción de terminación de un contrato de sub-arrendamiento de inmueble y la restitución del mismo, fundado en que no se acreditó que el contrato contemplara alguna condición resolutoria del derecho del sub-arrendador para contratar, la exigencia consignada en el motivo anterior obligaba al impugnante a denunciar la transgresión de aquellos preceptos que sirven para resolver la cuestión controvertida. Sin embargo, el recurrente omite extender la infracción a los artículos 1487, 1545, 1938 y 1942 del Código Civil y a las normas de la ley N° 18101, teniendo en consideración que es precisamente dicha normativa la que sirvió de fundamento al pronunciamiento del fallo recurrido.

Y al no hacerlo genera un vacío que la Corte no puede subsanar, dado el carácter de derecho estricto que reviste el recurso de nulidad intentado, razón por la cual se le rechazará por manifiesta falta de fundamento por este primer capítulo de nulidad.



Quinto: Que respecto al error de derecho en materia de costas, es menester consignar que el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil admite el recurso de casación en el fondo contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas -en lo que interesa- por Cortes de Apelaciones, siempre que se hayan dictado con infracción de ley y que dicha infracción tenga influencia en lo dispositivo del fallo.

Dicho lo anterior, cabe recordar que esta Corte ha resuelto reiteradamente que la decisión que recae sobre la imposición de las costas no reviste el carácter de sentencia definitiva pues se trata de una medida de carácter económico, y la circunstancia que ese pronunciamiento se contenga en una sentencia interlocutoria que pone término al juicio, o incluso en la misma sentencia definitiva, sólo responde a un imperativo legal sin que por tal motivo participe de su naturaleza jurídica.

Por consiguiente, la resolución impugnada por esta vía no reviste la característica de aquellas aludidas en el motivo anterior y el recurso de nulidad intentado no podrá ser admitido a tramitación.

Sexto: Que, en las condiciones anotadas, el segundo capítulo de nulidad también deberá rechazarse y -en consecuencia- en su totalidad el arbitro de nulidad sustancial intentado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 767, 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se **rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Isaac Ramírez Rojas, en representación de la parte demandante, en contra de la sentencia de trece de junio de dos mil veintitrés dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Nº 147.112-2023.





Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Arturo Prado P., María Soledad Melo L., Ministra Suplente Dobra Francisca Lusic N. y los Abogados (as) Integrantes Gonzalo Enrique Ruz L., Raul Fuentes M. Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés.

En Santiago, a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

